



INFORME MINISTERIO DE DEFENSA EN REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA TECNOLÓGICA

La reciente Cumbre de la OTAN celebrada en Ankara los pasados días 7 y 8 de julio, ha trasladado un mensaje claro e inequívoco: los compromisos de los aliados deben traducirse en capacidades y en una movilización de la base industrial de defensa.

España, en 2025, alcanzó el compromiso de inversión del 2% del PIB en defensa, y este esfuerzo se mantiene en 2026, en un contexto de crecimiento económico sostenido. España es el séptimo país de la OTAN por volumen total de gasto en defensa y el tercer país que más ha aumentado su inversión en 2024 y 2025.

Es precisamente en este escenario donde adquiere pleno sentido el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, como auténtica estrategia de Estado que integra el refuerzo de capacidades militares, el impulso tecnológico y el fortalecimiento industrial, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional y contribuir a la autonomía estratégica europea.

Los resultados alcanzados hasta la fecha muestran el alcance de esta apuesta. En la actualidad, el Ministerio de Defensa gestiona 79 programas de modernización, de los cuales 35 corresponden a los Programas Especiales de Modernización impulsados a través del Plan de 2025.

Esta cartera de programas continuará creciendo durante los próximos ejercicios.

Con la incorporación de los 15 nuevos Programas Especiales de Modernización previstos para 2026, junto con el programa Capacidad LEO Nacional, previsto para 2027, como contribución española al programa europeo de comunicaciones seguras por satélite, se alcanzará la cifra de 95 programas en curso, configurando el mayor esfuerzo de modernización acometido por nuestras Fuerzas Armadas.

El PEM “SATCOM multiórbita”, basado en una constelación nacional dentro del programa de la Comisión Europea IRIS², se materializará a través de una inversión estimada en una horquilla entre 1.600 y 2.000 millones de euros, destinada al desarrollo del segmento espacial,



el segmento terrestre de control y gestión y la operación del sistema durante todo su ciclo de vida.

Los 15 nuevos PEM impulsan el desarrollo de capacidades transversales en los ámbitos de las comunicaciones, la ciberseguridad, la inteligencia y la guerra electrónica mediante el empleo de nuevas tecnologías, la explotación de datos y la inteligencia artificial.

Para ello, contemplan el desarrollo y adquisición de sistemas de comunicaciones, criptográficos y de ciberseguridad, de obtención, análisis y explotación de inteligencia, así como sistemas avanzados de planeamiento y simulación.

Incluyen también la modernización de los sistemas de mando, control y comunicaciones de los Ejércitos/Armada y la UME, y la mejora de las capacidades de posicionamiento y navegación. Asimismo, para hacer frente a los desafíos de la inteligencia artificial ofensiva, reforzarán las capacidades nacionales mediante el desarrollo de sistemas de detección y protección de infraestructuras críticas y el uso responsable de la IA para anticipar, identificar y mitigar amenazas. Transcurrido ya más de un año desde la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico, corresponde hacer un balance y un análisis sobre el punto de situación de los 35 PEM que en el mismo se impulsaban y que constituyen un pilar fundamental del Plan, con un techo de gasto conjunto de 34.000 millones de euros hasta 2042.

Con respecto a la financiación de estos programas y conforme a lo establecido en los 8 Reales Decretos del Ministerio de Industria de concesión de prefinanciación, en 2026 se prefinanciarán 2.318,80 M € adicionales a los 4.500 M € del 2025.

Si los PEM constituyen el núcleo de la transformación de nuestras capacidades militares, los Planes de Participación Industrial representan el instrumento que garantiza que ese esfuerzo inversor se traduzca en desarrollo económico, innovación y fortalecimiento del tejido industrial español.

Están concebidos para reforzar la seguridad de España, modernizar sus capacidades operativas y su desarrollo evolutivo, impulsar su transformación digital, fortalecer la ciberdefensa, garantizar el sostenimiento de los sistemas y equipos en servicio y consolidar una industria capaz de competir en los mercados internacionales más exigentes.

Desde el inicio del Plan Industrial y Tecnológico, se ha perseguido un objetivo muy claro: que la inversión en defensa genere el mayor retorno posible para nuestro país.



Los resultados obtenidos reflejan la dimensión de este esfuerzo. Más de 840 empresas participan ya en los Planes de Participación Industrial asociados a los programas de modernización. Se trata de un ecosistema extraordinariamente diverso en el que conviven grandes empresas tractoras, pequeñas y medianas empresas altamente especializadas, centros tecnológicos, universidades y proveedores que forman parte de cadenas de suministro distribuidas por todo el territorio nacional.

Esta transformación industrial tiene también un profundo impacto sobre el empleo y la cohesión económica del país. La industria de defensa se caracteriza por generar puestos de trabajo estables, altamente cualificados y con un elevado componente tecnológico.

Según la información y los datos recogidos en los planes de participación industrial recibidos, la estimación de creación de empleo medio anual del conjunto de los 35 PEM del Plan de 2025 es de 22.073 empleos y una estimación de creación total de empleo a lo largo de la duración de los 35 programas de 155.436 empleos.

El porcentaje de nacionalización medio hoy, se situaría en el 73%, siendo el objetivo a alcanzar el 80% español y el 90% europeo.

Pero quizá uno de los aspectos más relevantes sea la capacidad vertebradora que posee esta política de inversión.

Los programas de modernización no concentran sus efectos en unos pocos polos industriales, sino que generan actividad económica en prácticamente todas las comunidades autónomas.

La incorporación de nuevos corredores industriales, la ampliación de la red de proveedores y el desarrollo de capacidades en sectores emergentes permiten distribuir oportunidades de crecimiento por todo el territorio nacional, fortaleciendo ecosistemas industriales regionales y favoreciendo una mayor cohesión económica.

Ahora bien, ningún proceso de transformación tecnológica puede sostenerse sin personas. Por ello, el fortalecimiento de la colaboración entre el Ministerio de Defensa, las empresas, las universidades, los centros tecnológicos y el sistema de Formación Profesional se ha convertido en una prioridad.

La inversión en talento es uno de los objetivos de la política de defensa.



Se han identificado 286 centros de formación vinculados a las tecnologías de mayor impacto para la defensa y para las capacidades prioritarias de la OTAN, entre ellos 73 centros de Formación Profesional de excelencia, 39 centros nacionales de referencia y 60 universidades, configurando una red de conocimiento que permitirá formar a los profesionales que demandará la industria durante los próximos años.

La política de inversión en defensa no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva presupuestaria. Constituye una política pública con una triple dimensión: fortalece nuestras capacidades militares, impulsa la transformación tecnológica e industrial del país y contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleo de alta cualificación.

Invertir en defensa es invertir en seguridad, pero también es invertir en tecnología, en industria, en talento y en el futuro de España.